

AMPARO EN REVISIÓN 173/2018
QUEJOSO Y RECURRENTE: *****.

PONENTE: MINISTRA MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS
SECRETARIA: TERESA SÁNCHEZ MEDELLÍN

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al veintitrés de mayo de dos mil dieciocho.

Vo. Bo.:

VISTOS Y RESULTANDO

Cotejó:

PRIMERO. Datos del juicio de amparo indirecto necesarios para la resolución del presente asunto.

Quejoso	***** , por su propio derecho.
Presentación de la demanda	21 julio 2017.
Tercero interesado	No existe.
Autoridades responsables	1. Congreso de la Unión. - Cámara de Diputados. - Cámara de Senadores. 2. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 4. Delegado Zona Sur de la Subdelegación de Prestaciones U.A.P.E., número 5.
Actos reclamado	El Juez de Distrito tuvo como actos reclamados: - La discusión, aprobación, expedición y promulgación de los artículos 6°, fracción XII,

AMPARO EN REVISIÓN 173/2018

inciso c), 131, fracción I, y 134, así como Primero y Décimo Transitorios de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada el treinta y uno de marzo de dos mil siete en el Diario Oficial de la Federación.

- La suspensión de la pensión por orfandad número *****.

Por otra parte, precisó que si bien la parte quejosa reclama de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores los actos consistentes en la promulgación y la publicación, así como del Presidente de la República reclama la aprobación, la expedición y la publicación; lo cierto es que las referidas autoridades únicamente se concretaron a emitir los actos consistentes en la **discusión, aprobación, expedición y promulgación** de la norma que por esa vía se combate, tal como se advierte de la publicación del Diario Oficial de la Federación del treinta y uno de marzo de dos mil siete.

Los artículos respecto de los cuales se reservó jurisdicción para conocer sobre su constitucionalidad en el amparo en revisión, son del contenido siguiente:

“Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

[...]

XII. Familiares derechohabientes a:

[...]

(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2011)

c) Los hijos del Trabajador o Pensionado mayores de dieciocho años, cuando no puedan mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica o discapacidad por deficiencias físicas,

	<p><i>mentales, intelectuales o sensoriales, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padecen, lo que se comprobará mediante certificado médico, expedido por el Instituto y por medios legales procedentes; o hasta la edad de veinticinco años, previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio superior o superior, de cualquier rama del conocimiento en planteles oficiales o reconocidos, y que no tengan un trabajo, y</i></p> <p><i>[...]”</i></p> <p><i>“Artículo 131. El orden para gozar de las Pensiones a que se refiere este artículo por los Familiares Derechohabientes será el siguiente:</i></p> <p><i>I. El cónyuge supérstite sólo si no hay hijos o en concurrencia con éstos si los hay y son menores de dieciocho años o que no sean menores de dieciocho años pero estén incapacitados o imposibilitados parcial o totalmente para trabajar; o bien hasta veinticinco años previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio o superior de cualquier rama del conocimiento en planteles oficiales o reconocidos y que no tengan trabajo;</i></p> <p><i>[...]”</i></p> <p><i>“Artículo 134. Si el Pensionado por orfandad llegare a los dieciocho años y no pudiese mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad duradera o discapacidad por deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, el pago de la pensión por orfandad se prorrogará por el tiempo que subsista su inhabilitación, previa comprobación anual mediante dictamen médico emitido por el propio Instituto para efecto de</i></p>
--	---

AMPARO EN REVISIÓN 173/2018

	<i>determinar su estado de invalidez, haciéndose acreedor, en caso contrario, a la suspensión de la pensión; asimismo continuarán disfrutando de la pensión los hijos solteros hasta los veinticinco años de edad, previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio o superior en planteles oficiales o reconocidos y que no tengan un trabajo.”</i>
Garantías violadas	Los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1o., 4o., 5o., 14, 16, párrafo primero, 17, párrafo segundo, 26, apartado A, 29, 123, párrafos primero, segundo, y apartado A, fracción XXIX, apartado B, y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los tratados internacionales que refiere.
Juzgado de Distrito	Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
Juicio de Amparo	*****
Admisión	3 agosto 2017.
Audiencia constitucional	13 noviembre 2017.

SEGUNDO. Sentencia de amparo indirecto.

Fecha de engrose	13 noviembre 2017.
Sentido	<p>El Juez de Distrito sobreseyó parcialmente en el juicio de amparo en relación con los artículos Transitorios Primero y Décimo de la Ley del ISSSTE.</p> <p>Arribó a tal conclusión, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al considerar que el juicio es improcedente en razón de que las disposiciones transitorias regulan la entrada en vigor de la referida legislación y las modalidades aplicables a pensiones distintas a la que disfrutaba el quejoso por orfandad, de suerte que carece de interés jurídico para reclamarlas.</p>

	<p>En lo que toca al fondo del asunto, decidió que los numerales 6, fracción XII, inciso c), 131, fracción I y 134 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del uno de abril del dos mil siete, son respetuosos del derecho a la seguridad social establecido en los artículos 123, apartado B, fracción XI, constitucional, 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 9 y 15 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” y 2, 6 y 7 de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, pues permiten que los hijos beneficiarios de los trabajadores fallecidos obtengan pensión de orfandad, incluso después de la mayoría de edad, siempre y cuando comprueben que están realizando estudios de nivel medio superior o superior.</p> <p>Explicó que como la norma constitucional y las internacionales no prevén una maximización del derecho que se estima vulnerado, desde luego que las normas legales reclamadas, al establecer como límite al disfrute de la pensión por orfandad la edad de veinticinco años y la condición de que el hijo sobreviviente soltero mayor de dieciocho años se encuentre realizando estudios de educación media superior o superior, no contravienen su contenido sustantivo.</p> <p>Por otra parte, declaró inoperantes los conceptos de violación dirigidos a demostrar que las normas legales impugnadas son violatorias de los numerales 1, 2, 11, 24, 25, 26 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1, 2, 3 y 4 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” y 6 y 7 de la Convención Interamericana sobre Obligaciones</p>
--	--

AMPARO EN REVISIÓN 173/2018

	<p>Alimentarias toda vez que el quejoso no expone cuál derecho humano está en discusión, de manera que es insuficiente para abordar el estudio de convencionalidad.</p> <p>Consecuentemente, negó la protección de la Justicia de la Unión solicitada.</p>
--	--

TERCERO. Trámite de los recursos de revisión principal y adhesivo.

Recurrente	***** , por su propio derecho.
Fecha de presentación	30 noviembre 2017.
Recurrente adhesiva	Tania Modori del Villar Aranda, en su carácter de Delegada del Presidente de la República.
Fecha de presentación	2 enero 2018.
Tribunal Colegiado al que correspondió conocer	Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Número de expediente	*****
Fecha de resolución	8 febrero 2018.
Sentido	<ul style="list-style-type: none">• Determinó que no era materia de la revisión el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito en relación con los artículos Primero y Décimo Transitorios de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por inexistencia del acto de aplicación atribuido al Presidente de la República y al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y que en razón de que tal decisión no fue combatida por la parte quejosa, tal determinación debía quedar firme.• Consideró que al no existir causas de improcedencia pendientes de estudio o que se adviertan de oficio, y al carecer de

	competencia para hacer el examen de constitucionalidad de los citados preceptos, ordenó la remisión de los autos a este Alto Tribunal para los efectos legales procedentes.
--	---

CUARTO. Trámite del recurso de revisión en este Alto Tribunal.

Admisión	23 febrero 2018.
Numero de toca	173/2018.
Turno	Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos.
Avocamiento	26 marzo 2018.

QUINTO. El proyecto de esta sentencia se hizo público en términos de lo dispuesto en los artículos 73 y 184 de la Ley de Amparo vigente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, ya que se trata de un recurso de revisión interpuesto en contra de la resolución dictada en un juicio de amparo indirecto, en el que se planteó la inconstitucionalidad de los artículos 6o., fracción XII, inciso c), 131, fracción I, y 134, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y subsiste en revisión el problema de constitucionalidad planteado. La competencia de esta Sala encuentra su fundamento jurídico en las siguientes disposiciones:

- 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal y 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo que establecen los requisitos de procedencia del recurso de revisión en amparo indirecto;

AMPARO EN REVISIÓN 173/2018

- 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece las atribuciones de las Salas para conocer de los recursos de revisión cuando subsista problema de constitucionalidad;
- Puntos Segundo, fracción III, y Tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiuno de mayo de dos mil trece que establece la posibilidad de que las Salas conozcan de los amparos en revisión que no requieran la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO. Oportunidad y legitimación. Es innecesario analizar la oportunidad de los recursos de revisión principal y adhesivo, toda vez que sobre tal aspecto se ocupó el Tribunal Colegiado que previno en el conocimiento del asunto (fojas 91 y 91 vuelta del cuaderno del amparo en revisión *****).

El recurso de revisión principal se interpuso por parte legitimada, toda vez que el escrito de expresión de agravios lo suscribió *****, por su propio derecho, en su carácter de quejoso en el juicio de amparo.

También el recurso de revisión adhesiva fue interpuesto por parte legitimada, toda vez que el escrito de expresión de agravios los suscribió Tania Modori del Villar Aranda, en su carácter de Delegada del Presidente de la República, personalidad que le fue reconocida por el Juez de Distrito del conocimiento mediante proveído de dos de octubre de dos mil diecisiete (foja 118 del juicio de amparo indirecto *****).

TERCERO. Consideraciones y fundamentos. Previo a ocuparse de los agravios propuestos conviene tener presente los siguientes elementos del juicio.

I. Antecedentes.

29 septiembre 2015	***** , obtuvo por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pensión por orfandad con el número ***** , con motivo de la muerte de su señor padre, de conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 131, fracción I, de la Ley del ISSSTE.
	La Jefa de la Unidad Administrativa de Prestaciones Económicas número 5, de la Delegación Regional de la Zona Sur del ISSSTE, suspendió a ***** , la pensión por orfandad que venía recibiendo, toda vez que el treinta de junio de dos mil diecisiete, cumplió la edad de 25 años, por lo que se actualizaba el supuesto establecido en el artículo 134 de la Ley del ISSSTE, así como por el artículo 40 del Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del ISSSTE.
21 julio 2017	Inconforme con la resolución anterior, ***** , interpuso juicio de amparo indirecto.
3 agosto 2017	El Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a quien por razón de turno correspondió conocer de la demanda, la admitió y registró con el número ***** .
13 noviembre 2017	Al emitir la sentencia respectiva, el Juez de Distrito sobreseyó parcialmente en el juicio de amparo en relación con los artículos Transitorios Primero y Décimo de la Ley del ISSSTE. Arribó a tal conclusión, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo,

AMPARO EN REVISIÓN 173/2018

al considerar que el juicio es improcedente en razón de que las disposiciones transitorias regulan la entrada en vigor de la referida legislación y las modalidades aplicables a pensiones distintas a la que disfrutaba el quejoso por orfandad, de suerte que carece de interés jurídico para reclamarlas.

En lo que toca al fondo del asunto, decidió que los numerales 6, fracción XII, inciso c), 131, fracción I y 134 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del uno de abril del dos mil siete, son respetuosos del derecho a la seguridad social establecido en los artículos 123, apartado B, fracción XI, constitucional, 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 9 y 15 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” y 2, 6 y 7 de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, pues permiten que los hijos beneficiarios de los trabajadores fallecidos obtengan pensión de orfandad, incluso después de la mayoría de edad, siempre y cuando comprueben que están realizando estudios de nivel medio superior o superior.

Explicó que como la norma constitucional y las internacionales no prevén una maximización del derecho que se estima vulnerado, desde luego que las normas legales reclamadas, al establecer como límite al disfrute de la pensión por orfandad la edad de veinticinco años y la condición de que el hijo sobreviviente soltero mayor de dieciocho años se encuentre realizando estudios de educación media superior o superior, no contravienen su contenido sustantivo.

AMPARO EN REVISIÓN 173/2018

	<p>Por otra parte, declaró inoperantes los conceptos de violación dirigidos a demostrar que las normas legales impugnadas son violatorias de los numerales 1, 2, 11, 24, 25, 26 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1, 2, 3 y 4 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” y 6 y 7 de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias toda vez que el quejoso no expone cuál derecho humano está en discusión, de manera que es insuficiente para abordar el estudio de convencionalidad.</p> <p>Consecuentemente, negó la protección de la Justicia de la Unión solicitada.</p>
30 noviembre 2017	Inconforme con la anterior sentencia, ***** , por su propio derecho, interpuso recurso de revisión.
11 diciembre 2017	El Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, admitió el recurso de revisión y lo registró con el número ***** .
4 enero 2018	El órgano colegiado del conocimiento, admitió a trámite la revisión adhesiva interpuesta por la Delegada del Presidente de la República.
8 febrero 2018	<p>El Tribunal Colegiado del conocimiento dictó sentencia en la que determinó:</p> <ul style="list-style-type: none">• Que no era materia de la revisión el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito en relación con los artículos Primero y Décimo Transitorios de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por inexistencia del acto de aplicación atribuido al Presidente de la República y al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y que en razón de que

AMPARO EN REVISIÓN 173/2018

	<p>tal decisión no fue combatida por la parte quejosa, tal determinación debía quedar firme.</p> <ul style="list-style-type: none">• Que al no existir causas de improcedencia pendientes de estudio o se adviertan de oficio, y al carecer de competencia para hacer el examen de constitucionalidad de los citados preceptos, ordenó la remisión de los autos a este Alto Tribunal para los efectos legales procedentes.
26 agosto 2016	<p>El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asumió su competencia originaria para conocer tanto del recurso de revisión principal, como de su adhesivo; acordó su admisión y ordenó el registro del asunto con el número 173/2018, así como que se turnara a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, para su estudio, y se enviaran los autos a la Segunda Sala.</p>

II. Síntesis de los conceptos de violación.

- Manifiesta el quejoso que los numerales 6o., fracción XII, inciso c), 131, fracción I, y 134 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, resultan violatorios de su derecho de seguridad social previsto en la Constitución Federal, así como en los tratados internacionales.
- La pensión por orfandad tiene como finalidad auxiliar al beneficiario a atravesar una etapa económicamente inactiva en la que se allegue de recursos necesarios que le permitan desarrollar sus planes de vida, esto es, en caso de que el beneficiario continúe con sus estudios profesionales debe proporcionarse a éste la pensión a la cual es acreedor hasta la obtención del título respectivo.

- Los numerales reclamados restringen el derecho del quejoso a continuar percibiendo la pensión por orfandad por cumplir veinticinco años de edad, ya que limitan la posibilidad de continuar con su educación.
- Para cumplir con el objetivo de la pensión por orfandad se debe otorgar al beneficiario los recursos económicos para obtener una profesión y dicha pensión se deberá prolongar hasta que obtenga un título profesional; actuar de forma contraria se mermarían las posibilidades del quejoso de incorporarse a una vida laboral efectiva y acorde con la profesión que eligió y realizar un plan de vida.
- Los preceptos reclamados resultan inconstitucionales e inconvencionales al exigir a los beneficiarios concluyan sus estudios antes de cumplir los veinticinco años de edad, lo cual impide que obtengan una profesión u oficio a la que se quieran dedicar.
- Los artículos reclamados violan lo dispuesto en los numerales 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9 y 15 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”; 2, 6 y 7 de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, toda vez que vulneran los derechos de seguridad social, protección familiar y dignidad, al impedir que el quejoso siga percibiendo la pensión por orfandad al haber cumplido veinticinco años de edad y tener pendiente su trámite de titulación y obtención de cédula profesional.

III. Consideraciones del Juez de Distrito. En lo que interesa, en esencia, son las siguientes:

AMPARO EN REVISIÓN 173/2018

- ✓ El Juez de Distrito sobreseyó parcialmente en el juicio de amparo en relación con los artículos Transitorios Primero y Décimo de la Ley del ISSSTE.
- ✓ Arribó a tal conclusión, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al considerar que el juicio es improcedente en razón de que las disposiciones transitorias regulan la entrada en vigor de la referida legislación y las modalidades aplicables a pensiones distintas a la que disfrutaba el quejoso por orfandad, de suerte que carece de interés jurídico para reclamarlas.
- ✓ En lo que toca al fondo del asunto, decidió que los numerales 6, fracción XII, inciso c), 131, fracción I y 134 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del uno de abril del dos mil siete, son respetuosos del derecho a la seguridad social establecido en los artículos 123, apartado B, fracción XI, constitucional, 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 9 y 15 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” y 2, 6 y 7 de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, pues permiten que los hijos beneficiarios de los trabajadores fallecidos obtengan pensión de orfandad, incluso después de la mayoría de edad, siempre y cuando comprueben que están realizando estudios de nivel medio superior o superior.
- ✓ Explicó que como la norma constitucional y las internacionales no prevén una maximización del derecho que se estima vulnerado, desde luego que las normas legales reclamadas, al establecer como límite al disfrute de la pensión por orfandad la edad de veinticinco años y la condición de que el hijo

sobreviviente soltero mayor de dieciocho años se encuentre realizando estudios de educación media superior o superior, no contravienen su contenido sustantivo.

- ✓ Por otra parte, declaró inoperantes los conceptos de violación dirigidos a demostrar que las normas legales impugnadas son violatorias de los numerales 1, 2, 11, 24, 25, 26 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1, 2, 3 y 4 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” y 6 y 7 de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias toda vez que el quejoso no expone cuál derecho humano está en discusión, lo que es insuficiente para abordar el estudio de convencionalidad.
- ✓ Consecuentemente, negó la protección de la Justicia de la Unión solicitada.

IV. Agravios de la revisión principal.

- Alega el recurrente, que resulta ilegal y errónea la determinación del Juez de Distrito de sobreseer en el juicio respecto a los artículos Primero y Décimo Transitorios, toda vez que parte de la premisa que no le causan perjuicio alguno, lo que no es correcto, toda vez que resulta inconcuso que la sola entrada en vigor y continuación de la vigencia de la ley que se impugnó mediante el juicio de amparo, y que ahora es motivo de revisión, le causa agravios al contener las normas que tildó de inconstitucionales e inconvencionales, por tanto, el órgano colegiado deberá revocar la sentencia recurrida por lo que hace al sobreseimiento, y en su lugar analizar los argumentos omitidos por el Juez de Distrito, así como los vertidos en la revisión y con base en ello determinar que los artículos 6o., 131,

AMPARO EN REVISIÓN 173/2018

fracción I, y 134 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, son inconstitucionales e inconvencionales por vulnerar los derechos humanos y garantías sociales de seguridad social, seguridad jurídica, protección a la familia, derecho a los alimentos y derecho a la dignidad y, por ende, otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal.

- Aduce, que el límite de veinticinco años para disfrutar una pensión de orfandad y la condición de que el hijo sobreviviente soltero mayor de dieciocho años se encuentre realizando estudios de educación media superior o superior son contrarios al derecho a la seguridad social establecido en los artículos 123, apartado B, fracción XI, constitucional, 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 9 y 15 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, 2, 6 y 7 de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, y otros, puesto que, en su apreciación, la pensión no debe encontrar límites, sino hasta cumplir su “objetivo” de procurar el mejoramiento del nivel de vida del beneficiario, es decir, hasta que obtenga el correspondiente título y cédula profesional que le permita ejercer la profesión estudiada.
- Manifiesta que el Juez recurrido infringió los principios de congruencia y exhaustividad que todo acto de autoridad debe contener, ya que de haberlos observado, hubiera advertido que los artículos 6o., 131, fracción I y 134 y Primero Transitorio son violatorios de sus derechos humanos y garantías sociales consagradas en los artículos 1o., 4o., 5o., 14, 16, párrafo primero, 17, párrafo segundo, 26, apartado A, 29, 123, párrafos primero y segundo, así como su apartado A,

fracción XXIX, y su apartado B, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 7, 8, 12, 22, 25, 28 y 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 1, 2, 11, 17, 24, 25, 26 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1, 2, 3, 4, 9 y 15 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” y 2, 6 y 7 de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, concernientes a sus derechos de seguridad social, derecho de protección a la familia, derecho a los alimentos y derecho a que se respete su dignidad.

- Que la prestación de una pensión por orfandad comparte teleológicamente el mismo objetivo que la institución de los alimentos, puesto que tienen como finalidad la de asegurar al beneficiario o acreedor el recurso económico necesario y proporcionarle los recursos necesarios para auxiliar a atravesar esa etapa económicamente inactiva, con la visión de que el beneficiario o acreedor se encuentren en aptitud de concluir aquella etapa educativa en la que se encuentran y posteriormente se pueda valer por él mismo, sin que pase desapercibido que tienden a cubrir las mismas necesidades.
- Argumenta que los numerales 6o., 131, fracción I, 134 y los artículos Primero y Décimo Transitorios fracción VI, último párrafo, de la Ley del ISSSTE, son transgresores de los derechos fundamentales de seguridad jurídica, seguridad social (principio de previsión social), protección a la familia y mi dignidad previstos en los artículos 1o., 4o., 5o., 14, 16, párrafo primero, 17, párrafo segundo, 26, apartado A, 29, 123, párrafos primero y segundo, así como su apartado A, fracción XXIX, y su apartado B, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 7, 8, 12, 22, 25, 28 y 30 de la

AMPARO EN REVISIÓN 173/2018

Declaración Universal de Derechos Humanos; 1, 2, 11, 17, 24, 25, 26 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1, 2, 3, 4, 9 y 15 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, adoptado en la Ciudad de San Salvador, y 2, 6 y 7 de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, por no cumplir con la finalidad de la pensión por orfandad, que es que se auxilie a los beneficiarios a atravesar la etapa de la vida económicamente inactiva, proporcionar los recursos económicos para que logren una profesión, arte u oficio a la que se quieran dedicar y finalmente esto culmine en lograr obtener una profesión que sea su medio de subsistencia para poder realizar su plan de vida.

- Solicita que como vía de consecuencia, se deje sin efecto el acto de aplicación consistente en la suspensión por orfandad a su favor y se ordene la devolución de las cantidades que le correspondan, desde la fecha en que le hayan sido retenidas por dicho concepto y hasta el momento que se dicte la resolución correspondiente, así como las subsecuentes hasta el momento en que obtenga su título profesional y la cédula con efectos de patente.

V. Agravios de la revisión adhesiva interpuesta por la Delegada del Presidente de la República. No se hace relación de ellos dado el sentido de la presente resolución.

VI. En la revisión competencia del Tribunal Colegiado se resolvió, en lo que en esta instancia interesa, en síntesis, lo siguiente:

- ❖ No es materia de la revisión el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito en el Considerando Tercero, por

inexistencia del acto de aplicación atribuido al Presidente de la República y al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En razón de que tal decisión no fue combatida por la parte a quien pudiera perjudicar, que es a la quejosa, debe quedar firme.

- ❖ Que del agravio y de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el promovente se inconforma con el hecho de que diversos artículos ordinarios de la Ley del ISSSTE establezcan veinticinco años como límite de edad para el goce de la pensión de orfandad y la condición de que el hijo sobreviviente mayor de dieciocho años se encuentre realizando estudios de educación media superior o superior. Como ninguna de dichas exigencias está regulada en los artículos transitorios, desde luego que no se trata de las normas que le provocan la afectación jurídica que combate; en consecuencia, la decisión del Juez debe estimarse correcta.
- ❖ Que no era materia de la revisión el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito en relación con los artículos Primero y Décimo Transitorios de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, porque la sola vigencia de la ley del instituto tampoco le produce, por sí misma, una afectación jurídica, pues aunque es cierto que en diversos artículos del cuerpo legislativo principal se establecen tales condiciones, también lo es que ese ordenamiento es la fuente del beneficio pensionario que ha venido disfrutando, y por ello tal determinación debía quedar firme.
- ❖ Que al no existir causas de improcedencia pendientes de estudio o se adviertan de oficio, y al carecer ese órgano colegiado de competencia para hacer el examen de

AMPARO EN REVISIÓN 173/2018

constitucionalidad de los citados preceptos, ordenó la remisión de los autos a este Alto Tribunal de la Nación para los efectos legales procedentes.

- ❖ Declaró su incompetencia legal respecto del problema de constitucionalidad subsistente por los artículos 6o., fracción XII, inciso c), 131, fracción I, y 134 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del uno de abril del dos mil siete.

CUARTO. En el caso, queda firme la consideración del Tribunal Colegiado respecto del sobreseimiento decretado en relación con los artículos Primero y Décimo Transitorios de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que sustentó en lo siguiente:

“En el considerando quinto de la sentencia sujeta a revisión, el Juez de Distrito sobreseyó parcialmente en el juicio por lo que corresponde a los artículos Transitorios Primero y Décimo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del uno de abril del dos mil siete.

Arribó a esa conclusión, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al considerar que el juicio es improcedente en razón de que las disposiciones transitorias regulan la entrada en vigor de la referida legislación y las modalidades aplicables a pensiones distintas a la que disfrutaba el quejoso por orfandad, de suerte que carece de interés jurídico para reclamarlas.

Contra ese aspecto de la decisión, en su primer concepto de violación, el promovente afirma que tiene interés jurídico en reclamar las disposiciones

transitorias porque son las que dan vigencia a la ley que reclama por imponer restricciones que le impiden continuar su disfrute.

Para resolver el planteamiento, se tiene en cuenta que del agravio y de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el promovente se inconforma con el hecho de que diversos artículos ordinarios de la ley del instituto establezcan veinticinco años como límite de edad para el goce de la pensión de orfandad y la condición de que el hijo sobreviviente mayor de dieciocho años se encuentre realizando estudios de educación media superior o superior.

Como ninguna de dichas exigencias está regulada en los artículos transitorios, desde luego que no se trata de las normas que le provocan la afectación jurídica que combate; en consecuencia, la decisión del Juez debe estimarse correcta.

La sola vigencia de la ley del instituto tampoco le produce, por sí misma, una afectación jurídica, pues aunque es cierto que en diversos artículos del cuerpo legislativo principal se establecen tales condiciones, también lo es que ese ordenamiento es la fuente del beneficio pensionario que ha venido disfrutando.

Ante la conclusión alcanzada, deben declararse inoperantes los agravios del recurso adhesivo en que el Presidente de la República insiste en la corrección del sobreseimiento parcial que se analiza.

No existiendo alguna causa de improcedencia hecha valer por las partes cuyo estudio hubiera omitido el Juez del conocimiento o que este órgano judicial advierta de oficio, procede entonces el análisis de los agravios propuestos por la parte quejosa”.

Consecuentemente, no será materia de estudio los agravios formulados por el recurrente, relativos a impugnar el sobreseimiento decretado por el Juez Federal, en relación a los artículos Primero y Décimo Transitorios de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

QUINTO Estudio. En cuanto al fondo del asunto el recurrente alega, que el límite de veinticinco años para disfrutar una pensión de orfandad y la condición de que el hijo sobreviviente soltero mayor de dieciocho años se encuentre realizando estudios de educación media superior o superior son contrarios al derecho a la seguridad social establecido en los artículos 123, apartado B, fracción XI, constitucional, 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 9 y 15 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, 2, 6 y 7 de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, y otros, puesto que, en su apreciación, la pensión no debe encontrar límites, sino hasta cumplir su “objetivo” de procurar el mejoramiento del nivel de vida del beneficiario, es decir, hasta que obtenga el correspondiente título y cédula profesional que le permita ejercer la profesión estudiada.

Los anteriores agravios son infundados, como más adelante se verá.

Cabe señalar que el acto de aplicación que se reclama es el realizado por las autoridades de la Delegación Zona Sur, Subdelegación de Prestaciones U.A.P.E.5, señaladas como ejecutoras de la suspensión de la pensión de orfandad que venía recibiendo ***** hasta el treinta de junio de dos mil diecisiete, fecha en la que adujo el quejoso le fue cancelada.

Al respecto, la Jefa de la Unidad Administrativa de Prestaciones Económicas Número 5 de la Delegación Regional Zona Sur del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, aceptó la existencia de la suspensión de la pensión por orfandad número *****, lo cual se corrobora con el original del oficio ***** del veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, (foja 135 expediente principal de amparo).

De lo anterior se pone de manifiesto que efectivamente al quejoso *****, le fue suspendida la pensión de orfandad que le venía otorgando el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Lo anterior evidencia que el problema materia del pronunciamiento de constitucionalidad que se revisa, es respecto a la pensión de orfandad otorgada por el ISSSTE a un derechohabiente mayor de edad, la cual venía recibiendo ininterrumpidamente desde el quince de septiembre de dos mil quince, hasta el treinta de junio de dos mil diecisiete, fecha en la cual al cumplir veinticinco años de edad le fue suspendida por el instituto de seguridad social; y ahora pretende le sea reanudada hasta que se titule debidamente y reciba su cédula profesional.

Previamente, es importante señalar el contenido de los artículos 123, fracción XI, 6o., fracción XII, inciso c), 131, fracción I, y 134 de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente, los cuales establecen:

“Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

[...]

B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:

[...]

XI.- La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

a).- Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.

b).- En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley.

c).- Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de

media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.

d).- Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley.

e).- Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares.

f).- Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la seguridad social regulándose en su ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos...”

“Artículo 6o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

[...]

XII. Familiares derechohabientes a:

[...]

c) Los hijos del Trabajador o Pensionado mayores de dieciocho años, cuando no puedan mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica o discapacidad por deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padecen, lo que se comprobará mediante certificado médico, expedido por el Instituto y por medios legales procedentes; o hasta la edad de veinticinco años, previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio superior o superior, de cualquier rama del conocimiento en planteles oficiales o reconocidos, y que no tengan un trabajo, y

“Artículo 131. El orden para gozar de las Pensiones a que se refiere este artículo por los Familiares Derechohabientes será el siguiente:

I. El cónyuge supérstite sólo si no hay hijos o en concurrencia con éstos si los hay y son menores de dieciocho años o que no sean menores de dieciocho años pero estén incapacitados o imposibilitados parcial o totalmente para trabajar; o bien hasta veinticinco años previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio o superior de cualquier rama del conocimiento en

planteles oficiales o reconocidos y que no tengan trabajo;

[...]”

“Artículo 134. Si el pensionado por orfandad llegare a los dieciocho años y no pudiere mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad duradera o discapacidad por deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, el pago de la pensión por orfandad se prorrogará por el tiempo que subsista su inhabilitación, previa comprobación anual mediante dictamen médico emitido por el propio Instituto para efecto de determinar su estado de invalidez, haciéndose acreedor, en caso contrario, a la suspensión de la pensión; asimismo continuarán disfrutando de la pensión los hijos solteros hasta los veinticinco años de edad, previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio o superior en planteles oficiales o reconocidos y que no tengan un trabajo.”

Ahora bien, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que del análisis de los artículos anteriores, es válido sostener que dichos preceptos no son inconstitucionales, ni tampoco inconvencionales, pues basta contemplar, en lo que interesa, que el hecho que establezcan quiénes son los derechohabientes con derecho a recibir una pensión y sobre todo que se instituya que los hijos solteros recibirán la pensión de orfandad sólo hasta los veinticinco años de edad, previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio o superior en planteles oficiales o reconocidos y que no tengan un trabajo, ello no viola ninguna norma convencional o constitucional, porque el legislador, en uso de la

AMPARO EN REVISIÓN 173/2018

libertad de configuración legislativa consideró que el tiempo prudente para terminar una carrera sería a los veinticinco años.

Por otra parte, no existe ningún tratado o convenio internacional en los que el Estado Mexicano sea parte, en los que se establezca una pensión por orfandad más allá de los veinticinco años, salvo los casos de excepción cuando el derechohabiente llegare a los dieciocho años y no pudiere mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad duradera o discapacidad por deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, es el caso cuando el pago de la pensión por orfandad se prorrogará por el tiempo que subsista su inhabilitación, previa comprobación anual mediante dictamen médico emitido por el propio Instituto para efecto de determinar su estado de invalidez, pero no entratándose de aquellos que continúan estudiando y no han recibido su título o cédula profesional, como en la especie, pues el legislador estimó que el lapso promedio en que se concluye una carrera es a la edad mencionada, máxime que las pensiones que se otorgan a los hijos de un pensionado terminan por lo general a la edad de dieciocho años, cuyo pago se prorroga hasta los veinticinco años de edad, siempre y cuando continúen con una carrera profesional, previa justificación de que están realizando estudios de nivel medio o superior en planteles oficiales o reconocidos y que no tengan trabajo.

Por tanto, las normas impugnadas no transgreden los derechos de seguridad social, protección a la familia, y a la alimentación, ni a la dignidad humana, porque los artículos 6o., fracción XII, inciso c), 131, fracción I, y 134 de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente, permiten que los beneficiarios de los trabajadores fallecidos obtengan los recursos económicos de una pensión por orfandad, incluso después de la mayoría de edad -hasta los 25

años de edad-, siempre y cuando cumplan con las condiciones antes referidas. Esto es, en dichos numerales se está maximizando esa prestación del seguro de orfandad por siete años más de la mayoría de edad.

Conforme a lo expuesto, dentro de las bases constitucionales mínimas del derecho a la seguridad social se encuentran las prestaciones que constituyen un apoyo suficiente a los familiares de los derechohabientes, en este caso concreto la pensión de orfandad, que coinciden con los derechos humanos reconocidos también en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.

En ese orden de ideas, el reconocimiento constitucional y convencional del derecho a la seguridad social se ha realizado mediante enunciados de principios y bases mínimas, de los cuales deriva un conjunto de obligaciones a cargo del Estado. El cumplimiento de éstas implica la adopción en las leyes de planes de seguridad social, que deben integrarse en un sistema que proteja a todas las personas contra las consecuencias, entre ellas, la muerte de un derechohabiente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa, la cual incluye la asignación de una pensión por orfandad a los beneficiarios de los asegurados.

Así, puede estimarse que resulta acorde con las bases constitucionales y convencionales del derecho a la seguridad que la norma impugnada condicione las prestaciones de orfandad a los hijos mayores de edad a que éstos se encuentren estudiando una carrera de nivel superior o que estén imposibilitados para trabajar, o que presenten padecimiento o enfermedades que los imposibiliten para tal fin.

AMPARO EN REVISIÓN 173/2018

Luego, en esa lógica, una vez que el hijo alcanza la mayoría de edad y está en aptitud de trabajar, los riesgos o imprevistos que pueden incidir en su ingreso deben ser cubiertos con cargo a los planes de seguridad social que correspondan al hijo por su actividad o trabajo, y no por el régimen al que pertenezcan los progenitores.

Por ende, el derecho a la seguridad social no implica que todas las personas tengan una expectativa de obtener prestaciones de cualquier plan de seguro social al que pertenezcan sus ascendientes sin que exista un mínimo criterio de dependencia con el asegurado; esto es, no se traduce en que toda persona por el hecho de estar estudiando acceda a la pensión de orfandad en los regímenes de seguridad social contributivos, sin importar su edad.

En ese sentido, la medida legislativa al condicionar el acceso de los hijos mayores de edad a la pensión de orfandad bajo un criterio de dependencia con el asegurado titular, no resulta contrario al derecho a la seguridad social reconocido en el artículo 123, apartado B, fracción XI, constitucional, y en los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que establece un criterio que de manera objetiva y general, basándose en una presunción de dependencia económica, justifica el otorgamiento de las prestaciones de sobrevivencia.

Lo anterior, con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del sistema de prestaciones, limitando su acceso a aquellos que, desde la mayoría de edad, están en condiciones de trabajar, y otorgándolo sólo a quienes se encuentran, desde siempre, con padecimientos que los incapacitan totalmente, pero siempre que así lo acrediten ante el organismo de seguridad social, o aquellos

que están realizando estudios de nivel medio o superior en planteles oficiales o reconocidos y que no tengan un trabajo.

Tal medida además es necesaria, porque el incremento de los costos del plan de seguridad social del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado pondría en riesgo su solvencia económica, si se continuara proporcionando una pensión de orfandad a aquel individuo con más de veinticinco años de edad, que habiendo terminado la carrera profesional no hubiera obtenido el título ni cédula profesional alguna, pues esa circunstancia podría eternizarse.

Esa situación adversa difícilmente podría solventarse con igual eficacia a partir de otras medidas (como el aumento de cuotas y aportaciones) o reducción de otros beneficios en perjuicio de los asegurados y sus dependientes (pensiones más bajas o atención médica limitada).

Además, la afectación que se produce con la negativa de la prestación de orfandad al hijo mayor de edad que estuvo en aptitud de trabajar es acorde al beneficio que se obtiene para mejorar la sostenibilidad de la prestación del servicio en el plan de seguro social de que se trata, a favor de todos los asegurados presentes y futuros.

La persona mayor de edad con aptitud para trabajar está en posibilidad de tener ingreso propio que le permita acceder a una vida digna y decorosa, así como la de ser inscrito en otros regímenes de seguridad social, y eventualmente ser titular de la protección de los planes y programas, no contributivos, de seguridad social de cobertura universal.

Consecuentemente, se reitera, el hecho de limitar a veinticinco años de edad la pensión de orfandad a los hijos de un

AMPARO EN REVISIÓN 173/2018

trabajador fallecido que acredite se encuentra estudiando, contrario a lo alegado por el quejoso, no hace inconstitucionales los artículos 6o., fracción XII, inciso c), 131, fracción I, y 134 de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente, ni los hace violatorios de los derechos humanos de seguridad social, dignidad, igualdad y discriminación y de protección a la familia.

Por las razones apuntadas, al resultar infundados los agravios, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima procedente confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo al quejoso en contra de los artículos 6o., fracción XII, inciso c), 131, fracción I, y 134, de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente.

SEXTO. Revisión adhesiva. Atento al sentido de esta ejecutoria, esta Segunda Sala considera procedente declarar sin materia la revisión adhesiva.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 166/2007, cuyos rubro y texto son:

“REVISIÓN ADHESIVA EN AMPARO INDIRECTO. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA SI LA REVISIÓN PRINCIPAL RESULTA INFUNDADA. El artículo 83, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé la procedencia del recurso de revisión contra las sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito, y en su último párrafo establece que en todos los casos a que se refiere ese precepto, la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses puede adherirse a la revisión principal. Ahora bien, si se toma en cuenta que el recurso de revisión adhesiva carece de autonomía, al señalar el párrafo indicado que la adhesión al recurso sigue

la suerte procesal de éste, es evidente que si la revisión principal resulta infundada, aquél debe declararse sin materia, por su naturaleza accesorio.”

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. En la materia de la revisión, se **confirma** la sentencia recurrida.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión **no ampara ni protege** a***** en contra de los artículos 6o., fracción XII, inciso c), 131, fracción I, y 134 de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente.

TERCERO. Se declara **sin materia** el recurso de revisión adhesiva.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Presidente Eduardo Medina Mora I.

Firman el Ministro Presidente y la Ministra Ponente, con el Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala, que autoriza y da fe.

AMPARO EN REVISIÓN 173/2018

PRESIDENTE:

MINISTRO EDUARDO MEDINA MORA I.

PONENTE:

MINISTRA MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIO DE ACUERDOS:

LICENCIADO MARIO EDUARDO PLATA ÁLVAREZ.

EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN SU SESIÓN DEL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL SIETE, Y CONFORME A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 3º, FRACCIÓN II, 13, 14 Y 18 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, ASÍ COMO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 9º DEL REGLAMENTO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, EN ESTA VERSIÓN PÚBLICA SE SUPRIME LA INFORMACIÓN CONSIDERADA LEGALMENTE COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE ENCUADRA EN ESOS SUPUESTOS NORMATIVOS.